

# Las 9 vidas del PRI

Cuando estaba en campaña para la presidencia, alguna persona le dijo a Enrique Peña Nieto que no podía creer en el PRI por todo lo que éste había hecho y causado. El hoy presidente le respondió que lo entendía pero que el suyo era un “nuevo PRI”, al que los jóvenes veían positivamente. Efectivamente, el PRI ganó la presidencia en 2012 y ha logrado preservar casi la mitad de las gubernaturas del país; de hecho, nada impide que pudiera llegar a ganar el año próximo. ¿Es lógico esto?

México es una anomalía comparado con países que se caracterizaron por partidos de Estado, en casi todos los casos autoritarios. En Taiwán, el KMT se ha adaptado y convertido en un partido competitivo porque abandonó sus vicios de antaño, entra y sale de la presidencia y, cuando está en la oposición, como hoy, se comporta como un partido más. En el este de Europa, los partidos comunistas han desaparecido o se han transformado.

El PRI sigue siendo, pues, el PRI. Ciertamente, se ha adaptado al mundo competitivo pero el contraste con aquellas naciones es patente: aquí el viejo sistema sigue tan vivo como antes; en lugar de que éste cambiera y el PRI se adaptara a un régimen político abierto, los demás partidos se han adaptado al viejo sistema, convirtiéndose en pilares que lo sostienen.

¿Cómo explicar que haya elecciones competitivas pero que el régimen priista y su monopolio del poder sigan estando ahí, en unas cuantas manos que no cambian, como si fueran sillas musicales? Hay muchas posibles respuestas, más las que a usted, estimado lector, se le ocurran:

México es una anomalía comparado con países que se caracterizaron por partidos de Estado, en casi todos los casos autoritarios. En Taiwán, el KMT se ha adaptado y convertido en un partido competitivo porque abandonó sus vicios de antaño, entra y sale de la presidencia y, cuando está en la oposición, como hoy, se comporta como un partido más.

Ante todo, el PRI nunca se fue: sigue estando ahí, domina buena parte del territorio nacional, sigue a cargo de una maquinaria electoral que es inigualable y, aunque ha perdido muchas gubernaturas, ha logrado que todos los gobernadores, así como los partidos de oposición, se comporten como priistas. O sea, casi casi, se podría decir que el PRI vendió franquicias...

La reforma electoral de 1996 fue peculiar en un sentido: no creó un sistema competitivo de partidos. Aunque a partir de ese momento contamos con un sistema de administración electoral impecable, los partidos compiten para luego arreglarse y mantener distante a la ciudadanía. Tenemos un sistema político-electoral al servicio de los partidos.

Cuando llegó el PAN a la presidencia, uno hubiera esperado un cambio de régimen: la eliminación de los viejos mecanismos de control, privilegio y abuso (y, por lo tanto, corrupción e impunidad), pero pasó exactamente lo contrario: el PAN se mimetizó con el PRI, se olvidó de construir un nuevo futuro y se corrompió hasta la médula, al grado que hoy ni siquiera tiene capacidad de entender dónde, cuándo y cómo extravió el camino.

Al PRD no le ha ido mejor. Heredero del

PRI en su principal bastión, el DF, se ha dedicado a atender a sus clientelas, corromperlas y, en los últimos meses, a buscar la forma de sobrevivir frente a su Némesis, AMLO. En lugar de cambiar el sistema de gobierno y mejorar la vida de los habitantes de la ciudad, se ha dedicado a inventar constituciones, nuevos nombres y mucho ruido, pero no un mejor nivel de vida, mejor infraestructura o una capacidad de atender a la ciudadanía. El hecho de que esté luchando por su sobrevivencia lo dice todo.

No menos importante, el gobierno actual ha exacerbado todos los límites: ha empleado a las instituciones para atacar a sus enemigos, proteger y perdonar a sus cómplices. Ha generado un clima de impunidad extrema que no sólo aliena a la ciudadanía, sino que ha arriesgado dramáticamente el futuro.

Al final del día, el viejo régimen se preserva por dos razones: por un lado, porque el electorado se ha fragmentado tanto (en buena manera intencionalmente) que todo se ajusta al nivel de votos que el PRI pueda ganar. Sin embargo, como ilustró el sainete reciente en torno a la instalación de la junta directiva del Congreso y del Senado, todos los partidos juegan el mismo juego: la pre-

servación del statu quo.

Pero la otra razón es mucho más reveladora: aunque el 70% del electorado está en contra de López Obrador, él no solo domina el panorama, sino que constituye el factor que ilustra el fracaso de todas esas reformas electorales y de los partidos principales. La abrumadora mayoría de los votantes no lo quieren, pero podría ganar precisamente porque representa, o ha logrado posicionarse, como el único capaz de ofrecer una alternativa.

El problema electoral mexicano se reduce a un elemento: todas las reformas que se han avanzado en las últimas décadas han tenido un objetivo medular, que es el de no alterar la estructura del poder. Esa lógica es explicable para un régimen emanado de una revolución, pero entraña una consecuencia obvia: tarde o temprano, el engaño resulta evidente. Lo peculiar, y patético, es que el desafío central provenga no de una opción futurista y promisoría (el famoso Macron mexicano), sino de la perspectiva más retardataria y reaccionaria posible.

A semanas de iniciar el proceso electoral real (al diablo lo formal), la ciudadanía sabe que sus opciones son limitadas por todo lo que han construido los partidos y sus políticos. El dilema en que se encuentran éstos, y todo el país, no es producto de la casualidad.

@lrubiof

**ÁTICO:**

El país está en la tesitura más delicada posible por la forma en que se conduce el PRI y cómo ha corrompido a los demás partidos.

Jesús Cantú

Jorge Zepeda Patterson

## Todo el poder del Estado contra Nieto

No basta con destituirlo; hay que aniquilarlo y sentar un precedente para que nadie más ose desafiar el poder del Estado mexicano. Santiago Nieto, hoy ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no únicamente fue destituido ilegal y arbitrariamente de su puesto, sino que ya le iniciaron, al menos, seis averiguaciones previas en su contra: de acusador pasó a acusado.

Una semana después de haber sido destituido, Nieto desistió de su intención de ser reinstalado en el cargo ante la necesidad de dedicarse a preparar su defensa jurídica, pues corre el riesgo de ser encarcelado.

Para disipar cualquier duda de que en México vivimos una autocracia, la respuesta del Estado mexicano al intento de un servidor público de hacer valer el Estado de Derecho es brutal: destitución y persecución.

En cualquier democracia la respuesta ante una situación similar sería la renuncia del Jefe de Gobierno o, al menos, el otorgamiento de plenas garantías para que el responsable de las investigaciones cumpliera cabalmente con sus responsabilidades. En México, lo que procedió fue la destitución y persecución de quien encabezaba las investigaciones.

Los hechos de la última semana evidencian el extraordinario poder concentrado en la figura de una sola persona, que puede arbitraria y discrecionalmente cesar y perseguir a quienes por proceder conforme a derecho, amenazan su poder.

Lamentablemente el uso político electoral de la Procuraduría General de la República ha sido una constante, tanto en los gobiernos priistas como en los panistas. EL caso más representativo del gobierno foxista fue el desafuero Andrés Manuel López Obrador, en el 2005 como la vía para impedirle ser candidato a la Presidencia de la República en el 2006. Y, en el de Felipe Calderón, el llamado “michoacanazo”, cuando el 26 de mayo de 2009 —en la víspera de las elecciones intermedias— el gobierno federal en un operativo

policíaco militar detuvo a 38 servidores públicos municipales y estatales incriminados por su involucramiento con “La Familia Michoacana”; todos fueron liberados, el último en abril del 2011.

En este sentido no hay mayores cambios, sin embargo, en el presente caso no se trata únicamente de eliminar a un contendiente electoral o de impactar a la opinión pública a la mitad de un proceso electoral, sino de mostrar la fuerza del Estado y reconstituir el priato.

Es importante dejar claro que el presidente mexicano todavía es intocable; quien intente investigar hechos que eventualmente puedan incriminarlo directamente pagará las consecuencias: no únicamente la destitución, sino la persecución. Esta es la respuesta presidencial a la averiguación previa relacionada con el caso Odebrecht-Lozoya, que eventualmente evidenciaría el ingreso de recursos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el 2012.

Otra vez, esto no es nuevo, durante el gobierno de Fox, la investigación de “Amigos de Fox” nunca caminó. En aquel entonces, el sometimiento de la Fepade era tal que ni siquiera hubo riesgo de que se integrase una averiguación previa amenazante; ahora, sí hubo el intento y la respuesta fue fulminante.

Pero la segunda intención es todavía peor, pues las elecciones de junio pasado, particularmente en el Estado de México y Coahuila, evidenciaron que la estrategia electoral del PRI involucra de manera central: el uso de programas sociales, el desvío de recursos públicos; la utilización de recursos privados no reportados; y la compra y coacción del voto. Nieto Castillo integraba varias averiguaciones previas vinculadas a estos presuntos delitos y, por supuesto, que su posible sanción daría al traste con la estrategia electoral tricolor de cara al 2018.

En ese sentido, el descabezamiento de la Fepade simplemente es completar la toma de las instancias elec-

torales. El PRI ya tiene el control de, al menos, 4 de los 11 Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y con ello tiene la posibilidad real de bloquear muchas de las decisiones más importantes, por ejemplo la designación del Titular de la Unidad de Fiscalización.

En el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen asegurada la mayoría de los votos, como se evidencia con los rechazos de varios de los acuerdos del Consejo General del INE que les resultaban incómodos, como el llamado de “cancha pareja”, la regulación de los programas sociales durante los procesos electorales o los dictámenes de fiscalización de la elección de Coahuila.

Para cerrar el círculo requerían también controlar la Fepade, pues era la única de las 3 autoridades electorales que les impedía tener plena libertad para implementar su estrategia electoral para el 2018. Sin Nieto Castillo en la misma, ahora sí no hay autoridad electoral que les impida cometer todo tipo de delitos, irregularidades y arbitrariedades, todo está bajo su absoluto control.

Pero no bastaba con asegurar el control de la Fepade, había que aprovechar el caso para escarmentar a todas las autoridades electorales: se someten a los designios presidenciales o sufrirán las consecuencias. Dado que el desempeño del gobierno de Peña Nieto no les asegura refrendar su triunfo en las urnas legal y legítimamente, tenían que garantizar el control de las instituciones electorales para lograrlo, incluso violando la ley.

Ahora sí se disponen a reconstituir el priato; ya aprovecharon el presente sexenio para asegurar el control de la mayoría de los 11 Ministros de la Suprema Corte de Justicia; el próximo primero de julio del 2018 pretenden no sólo ganar la Presidencia de la República, sino refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados y ganarla nuevamente en el Senado.

## Historia de un héroe efímero y desechable

La declaración de Miguel Ángel Osorio Chong no tiene desperdicio: el gobierno no puede ser omiso ante las faltas de Nieto, dijo a los diputados, para justificar el despido de Santiago Nieto como fiscal de delitos electorales. Lo que no dijo Osorio es que la falta del funcionario no fue jurídica, sino política y se trata de un pecado imperdonable para el sistema: exhibir a miembros del primer círculo de poder del país.

En teoría Osorio Chong, secretario de Gobernación, se refería a la supuesta violación del secreto jurídico que cometió el funcionario cuando reveló al diario Reforma que había recibido una carta de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en la que este presionaba al fiscal para que lo declarara inocente de la acusación de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Las declaraciones de Nieto incendiaron Troya. Bastaron algunas horas para que el sistema se resolviera en contra del arranque de honestidad del funcionario y le aplicara todo el rigor de la “justicia” política punitiva. El viernes 21 fue despedido, una semana después lucha para no terminar con sus huesos en la cárcel.

El gobierno, que sí puede ser omiso con gobernadores que robaron durante seis años lo imaginaba o con directores de Pemex enriquecidos a mansalva, encuentra ahora inadmisibles el arranque de honestidad, autonomía y ligereza de Santiago Nieto y se dispone a despedazarlo. Con súbita indignación los abogados de Emilio Lozoya y de Arturo Escobar (ex dirigente del Partido Verde, procesado por Nieto por delitos electorales) presentaron denuncias penales en contra del ex fiscal. El propio Reforma, resentido quizá por el hecho de que un Nieto asustado llegó a decir que el diario había sacado de contex-

En teoría Osorio Chong, secretario de Gobernación, se refería a la supuesta violación del secreto jurídico que cometió el funcionario cuando reveló al diario Reforma que había recibido una carta de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en la que este presionaba al fiscal para que lo declarara inocente de la acusación de haber recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

to sus declaraciones, tituló este sábado que el ex fiscal “acumula denuncias en su contra”, aunque solo revela las de los dos políticos, Lozoya y Escobar, que claramente forman parte de la estrategia persecutoria del sistema. Y en su columna Templo Mayor, el diario menciona que “andan circulando archivos con información reveladora sobre un asunto personal que tiene que ver con su pasado y que, de hacerse público, lo pondría en una posición muuuy (sic) comprometida”. Una filtración que seguramente salió de círculos oficiales para beneficio del diario, que se presta al linchamiento de Nieto incluso sin necesidad de precisar su supuesto delito o pecado. Por no hablar del hecho de que esa filtración es también una violación del secreto jurídico si es que se trata de una investigación en proceso. Castigan a Nieto echando mano del mismo recurso por el cual lo están crucificando.

No tengo idea del cadáver en el closet que puedan estarle fincando a Santiago Nieto ni meter las manos al fuego por su inocencia (nadie llega a fiscal en este sistema por ser la Madre Teresa de Calcuta). Lo que sí me queda claro es que con el aparato mediático al servicio del poder, pueden destruirlo incluso por haberse disfrutado de ratón en una fiesta infantil hace 40 años. La miscelánea fiscal es tan

compleja y tan sujeta a interpretación que cualquier puede convertirse en defraudador fiscal si la autoridad así lo determina. En todo caso, es evidente que Nieto ya no quiere queso sino salir de la ratonera (si se me permite extender la alegoría del roedor). Por lo pronto ya le avisó a Gamboa Patrón y a sus otros Torquemadas, que renuncia a sus intentos de ser reinstalado en la fiscalía y se dedicará a defenderse de las denuncias jurídicas. O en palabras de Andrés Manuel López Obrador, ya tiró la toalla.

Las reconversiones de Santiago Nieto en los últimos diez días ilustran, mejor que cualquier otra cosa, la sociedad política pre moderna en la que vivimos. El ex fiscal de delitos electorales pasó de ser un funcionario más del sistema y relativamente desconocido, a efímero paladín de la honestidad, para convertirse, horas después, en un paria perseguido por el sistema. El mensaje es evidente: “al que se mete con nosotros lo destruimos”.

Habrá que ver qué juez o fiscal se atreve a procesar a un poderoso del primer círculo después de la moraleja que deja este terrible capítulo. Y si lo hace, ahora ya sabe que no terminará como héroe sino como mártir o, peor aún, como delincuente.

@jorgezepadap